

LA COYUNTURA ELECTORAL DEL ECUADOR EN UN CONTEXTO DE COMPARACIONES HISTÓRICAS

*Juan J. Paz y Miño Cepeda**

Publicado por: Revista *LA TENDENCIA*

Quito, Enero de 2007, No. 4, ps. 11-17

La coyuntura electoral del Ecuador en 2006 se parece en mucho a lo que sucedía en 1979, cuando se inició la fase constitucional más larga de la historia nacional. Por entonces, el Consejo Supremo de Gobierno (1976-1979) había ejecutado un plan de retorno al orden constitucional que rompió las directrices pretendidas por la derecha política y los políticos tradicionalistas de la época, cuando exigían una asamblea constituyente como único mecanismo legal para salir de la dictadura, cuestionaron la formación de las comisiones de reestructuración jurídica y enfilaron contra la Constitución aprobada por referendo en 1978 y contra la Ley de Partidos Políticos que, por primera vez, institucionalizó su existencia legal.

Ante la inevitable e irreversible decisión sobre los acontecimientos, esas mismas fuerzas opositoras al mecanismo de retorno adoptado por la dictadura tuvieron que participar en las elecciones. Cuando se volvió cierta la posibilidad de que el binomio Jaime Roldós-Osvaldo Hurtado triunfara, se articuló contra ellos no solo la “campana sucia” sino todo un frente político destinado a detener a la joven pareja de políticos, que ofrecía a través de los “21 Puntos Programáticos” un plan de reformas que asustó a la derecha económica y política del Ecuador, también al gobierno norteamericano y, sin duda, al capital transnacional.

Triunfante Roldós en la primera vuelta, toda la oligarquía nacional y la derecha política identificada con ella, se unió a la candidatura de Sixto Durán Ballén para la segunda vuelta. ¡Qué no se hizo para evitar el triunfo de Roldós y Hurtado! Varios dirigentes de las cámaras de la producción hablaban y escribían sobre el peligro de reproducir en Ecuador las fórmulas socialistas de Salvador Allende en Chile. El Partido Social Cristiano (PSC) y su caudillo máximo León Febres Cordero protagonizaban los ataques más despiadados contra quienes no habían administrado “ni la tienda de la esquina” y particularmente contra el “comunista” Hurtado, tildado, además, de “sociólogo vago”. Se llegó a proponer que Sixto Durán renunciara a participar en la segunda vuelta. También el Tribunal Supremo Electoral de la época se convirtió en un instrumento destinado a evitar el triunfo de los jóvenes reformistas. Y hasta la dictadura pretendió evitar el “peligro” que se venía. Pero Roldós triunfó en forma aplastante sobre el candidato socialcristiano Durán Ballén.

En las elecciones recientes del Ecuador, durante la primera vuelta la propia derecha económica y política traicionó a su candidata Cinthya Viteri, patrocinada por el PSC, quien incluso perdió en Guayas y particularmente en Guayaquil, ejes de la dominación política socialcristiana en el país. Ya en primera vuelta esas fuerzas se alinearon con Álvaro Noboa, el magnate bananero que, aunque no era de su agrado, no manifestaba ni tiene intereses diferentes. Y cuando la posibilidad del triunfo del binomio Rafael Correa – Lenin Moreno se volvió cierta, incluso con la perspectiva de ganar en la primera vuelta, prácticamente todas las candidaturas coincidieron en una consigna forjada en los hechos: “todos contra Correa”.

Para la segunda vuelta electoral, no hay duda alguna que la derecha económica y política beneficiaria del *modelo empresarial* de desarrollo consolidado durante las

últimas décadas y beneficiaria de la desinstitucionalización estatal, pero ahora también una serie de medios de comunicación y particularmente las grandes empresas de televisión privada, sostuvieron y respaldaron la candidatura de Álvaro Noboa, convertido en la nueva esperanza salvadora del neoliberalismo criollo, del sistema político existente y de la garantía del poder hegemónico constituido por todos ellos. Desde luego, a esas fuerzas internas hay que sumar ciertas fuerzas internacionales, como las que han llevado adelante la diplomacia neoimperialista del gobierno norteamericano y las que soportan la expansión “globalizadora” del capital transnacional. Desde luego, si bien estas fuerzas no son las que juegan el papel protagónico directo en la vida electoral del Ecuador, sin duda se identifican mejor con los intereses defendidos por Álvaro Noboa, que con el “peligroso” proyecto de Rafael Correa.

¡Qué no han hecho las fuerzas de soporte de Noboa para evitar el triunfo del proyecto político representado por Correa! La “campana sucia” es lo de menos. Se han movido millones de dinero y de esfuerzos para identificar a Correa con el presidente venezolano Hugo Chávez, para también identificarlo con la Cuba de Fidel Castro y para tratar de convencer a todos que el izquierdismo latinoamericano es “malo”, mientras que lo único “bueno” es la estabilidad macroeconómica, la dolarización, la libre empresa, el mercado abierto, el TLC, la flexibilidad laboral y la institucionalidad capturada por la clase política, tal como en estos momentos existe. Quién atente contra todo ello, y en este caso específico esa figura es vista como Rafael Correa, corre el riesgo de traer al Ecuador un clima de inestabilidad, de violencia, de autoritarismo, de “populismo” y de falta de democracia. En los medios de comunicación –pero también entre académicos e intelectuales, lo cual realmente llama la atención-, Rafael Correa ha sido visto desde ópticas tan subjetivas que para ello no han faltado las extravagancias del uso de psicólogos que aportan a su “perfil”, de la utilización del sistema FODA (aplicado a la administración empresarial) para dar cuenta de sus virtudes o defectos y, en fin, no ha faltado ese típico análisis personalista que ha formado larga historia en la ciencia social ecuatoriana.

Como ocurrió en 1979 contra Jaime Roldós, en 2006 enfiló contra Rafael Correa otro proyecto político identificado abiertamente con los intereses de la oligarquía y las derechas institucionales. Es esto lo que polarizó la elección de segunda vuelta. De manera que el triunfo de Correa no solo representa la posición asumida por la amplia mayoría nacional, sino la derrota electoral del proyecto oligárquico.

Pero el triunfo de Rafael Correa también podría tener el riesgo de parecerse a lo que ocurrió entre 1981-1984 bajo el gobierno de Osvaldo Hurtado, al menos desde el ángulo de las resistencias oligárquicas vencidas.

Durante todo el ejercicio gubernamental de Hurtado, no solo fueron los sindicatos activos a través del Frente Unitario de Trabajadores (FUT) los que mantuvieron constante oposición al régimen, sino que fue particularmente grave y de mayor significación la resistencia desatada por el alto empresariado a través de las cámaras de la producción, la derecha política y fundamentalmente el PSC y su caudillo Febres Cordero. El “comunista” Hurtado asustaba, a pesar de que el gobierno empezó a dar un giro a la conducción del desarrollo económico del país, pues varias de las políticas adoptadas implicaron un abandono del *modelo estatal-desarrollista* y la apertura hacia el *modelo empresarial*.

El legado febrescorderista

Lo que ocurrió posteriormente es aún más significativo. Para la campaña presidencial de 1988 se constituyó el pomposo “Frente de Reconstrucción Nacional” que precisamente quería dar a entender que con Hurtado se había “destruido” el país. La oligarquía y la derecha política se agruparon en torno a la candidatura de León Febres Cordero y llegaron al poder. De inmediato, líderes o dirigentes de las cámaras de la producción, hombres de la empresa privada y políticos vinculados pasaron a ocupar las instituciones estatales. Según sus aseveraciones, ellos sabían del manejo económico, sabían hacer riqueza, daban trabajo a la gente, habían hecho este país. ¡Cómo desconfiar de semejantes y poderosas fuerzas! Obviamente, los resultados del gobierno febrescorderista (1984-1988) fueron duales: altamente beneficiosos para quienes ocuparon el poder, pero tremendamente perjudiciales para los sectores populares, los trabajadores ecuatorianos, las capas medias, los pequeños y medianos propietarios. Y, además, tremendamente perjudicial para la democracia pues se enseñoreó en aquel período el autoritarismo, la corrupción y las violaciones sistemáticas no solo a los derechos humanos sino a la Constitución. A tal punto es esto una realidad, que el Congreso Nacional, mediante resolución del 21 de enero de 1987 pidió la renuncia de Febres Cordero, único caso en la historia del Ecuador contemporáneo.

Con semejante experiencia histórica y si se entiende bien el contenido del proyecto político y económico representado por Álvaro Noboa, no debiera quedar duda que el triunfo de este multimillonario bananero habría dado continuidad al febrescorderismo; pero, además, ni siquiera a favor de consolidar el *modelo empresarial* impulsado en Ecuador desde hace dos décadas, sino con miras a la consolidación de un *modelo oligárquico* de desarrollo, para el cual el mercado libre y el crecimiento capitalista son la prioridad, sin responsabilidades frente al Estado Nacional (o con responsabilidades disminuidas) y, ante todo, sin responsabilidades sociales. Porque precisamente es muy propio del pensamiento oligárquico más tradicional sostener la necesidad del crecimiento de los negocios privados sin que el Estado “estorbe” y, sobre todo, sustentar la “riqueza” sobre los bajos salarios, la precarización laboral, la burla a la legislación protectora del trabajador ecuatoriano y la creencia de que la baratura de la mano de obra nacional es una “ventaja comparativa”, sobre todo lo cual, además, para ser supuestamente más modernos, hay que “flexibilizar” el Código del Trabajo.

Para demostrar esa experiencia histórica de la sociedad oligárquica bastaría con recordar las épocas del cacao y del banano, en las cuales una elite agroexportadora, vinculada a comerciantes y banqueros ligados por iguales intereses, dominaron al Ecuador, construyendo una economía inequitativa y una democracia excluyente. Álvaro Noboa no ofrecía al Ecuador la dinámica empresarial de los capitalistas modernos, sino la del típico agroexportador latinoamericano tradicional. Convertido en ideal de magnate para otros seguidores, el proyecto noboísta no representaba el futuro, sino el pasado, a pesar de que el lenguaje de campaña parecería conectado con la globalización y la dinámica del capitalismo contemporáneo.

Es ese proyecto oligárquico, más la hegemonía política del socialcristianismo sobre diversas instituciones estatales, junto con la reproducción de la misma clase política consolidada casi como “clase dominante” durante las recientes décadas constitucionales del Ecuador y más la vigencia de la corrupción generalizada entre esa misma clase política y la edificación del neoliberalismo criollo en el país, con todas sus nefastas consecuencias sociales, lo que polarizó las elecciones ecuatorianas tanto en la primera vuelta como evidentemente en la segunda.

La candidatura de Rafael Correa y las ofertas de cambio expresadas por ella han sido un elemento de renovación total, que no se había vuelto a ver en el país desde 1979. Se ha dicho que también Lucio Gutiérrez despertó, a su tiempo, iguales esperanzas transformadoras. Pero no es así. No había razones para confiar en el proyecto político representado por Gutiérrez, aunque cierta izquierda e incluso los dirigentes indígenas y de otros movimientos sociales se engañaron con ello. El gobierno de Lucio Gutiérrez finalmente resultó un vehículo para la afirmación del *modelo empresarial* de desarrollo inaugurado por Febres Cordero.

El “peligro” de Correa y del proyecto encabezado por Alianza País siempre fue bien entendido por aquellas fuerzas sociales beneficiadas con el rumbo del país durante las dos últimas décadas. Por eso su alineamiento con Noboa. Y su desesperación al sentir la derrota. Creo que no debieran existir dudas sobre la resistencia y el boicot que tales fuerzas librarán contra los cambios económicos, sociales y políticos anunciados por Rafael Correa y su equipo. Esa resistencia no es nueva en la historia nacional. Por eso es que en el pasado los cambios tuvieron que imponerse mediante fórmulas revolucionarias: la Marcista en 1845, la Liberal en 1895, la Juliana en 1925, para citar los casos más importantes. También debieron imponerse a través del Estado desarrollista, como ocurrió en las décadas de los años 60 y 70. De manera que el triunfo de Correa, o mejor, el proyecto político que él representa, despertará a las fuerzas afectadas. Desde el Congreso, por ejemplo, uno de los diputados socialcristianos anunció la necesidad de crear un “frente de resistencia” a la asamblea constituyente planteada por Correa para enfrentar a la clase política tradicional.

A fin de paralizar las reformas y los cambios propuestos, también se ha comenzado a decir que una cosa son las ofertas de campaña pero que ahora, pasada ya la euforia, se necesita arribar a la sensatez y a la cordura. Se repite que hay que revisar la posición frente al TLC porque el Ecuador no puede marginarse del mundo. Se envían voces al presidente electo para que modere sus planteamientos, para que no caiga en la radicalidad izquierdista, para que no se identifique con Hugo Chávez. También se difunden mensajes ideológicos sosteniendo que hay que cuidar que la economía no se desestabilice; que es necesario preservar la democracia, garantizar a la empresa y los capitales privados; incluso que el pueblo, aunque se pronunció por Correa, quiere tranquilidad, paz y trabajo. Se advierte que puede reproducirse la tensión existente en Bolivia con Evo Morales. ¿De qué se trata todo esto? En última instancia, de evitar los cambios y las reformas. De paralizar un proyecto gubernamental distinto. Si no se escuchan estas voces se habla de arrogancia, autoritarismo, antidemocracia, falta de consensos. Así, también se busca aflojar la voluntad y el respaldo popular.

Cambios radicales y en el menor tiempo posible...

El gobierno de Correa se encuentra ante ese desafío: realizar los cambios y las reformas o sucumbir aflojando el proyecto político en función de los poderosos intereses contrarios a él. Porque el triunfo electoral de Correa debiera leerse e interpretarse en el sentido de que la población que votó por él lo que precisamente quiere es esos cambios radicales y profundos y en el menor tiempo posible. Que ello afectará al sector privilegiado de la sociedad ecuatoriana es inevitable. Y hasta deseable, sobre todo si es que existe un claro alineamiento e identidad con la multifacética variedad de la izquierda ecuatoriana. Algo parecido al alineamiento necesario que demandó la Revolución Liberal de todas las facciones liberales de la época. Alfaro incluso tuvo que imponerse sobre el propio congreso liberal para hacer la gran obra del ferrocarril, pues

fue el mismo congreso liberal el que se oponía al contrato del ferrocarril. Hubo diputados que defendían a los arrieros, con sus mulas de carga, argumentando que el ferrocarril “acabaría con el trabajo de esa pobre gente en el país”.

La polarización electoral no la creó la candidatura de Rafael Correa, sino la resistencia de quienes no han querido dar paso a las reformas económicas, sociales y políticas que el país ha demandado desde hace tiempo. Porque, si se recuerda, incluso el tema de la asamblea constituyente no es nuevo. Durante el gobierno de Rodrigo Borja (1988-1992) se ejecutó el proyecto “Ecuador Siglo XXI”, entre el Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE) y la Agencia de Cooperación Técnica (GTZ) de la República Federal de Alemania. En ese marco se realizaron diversas investigaciones y publicaciones. Una de ellas titulada “Reforma del Estado en el Ecuador. Alternativas para el cambio institucional” (1992) advirtió la crisis de la economía, la sociedad y los sistemas de representación partidista; la hegemonía de los partidos gobernantes; el conflicto institucional Ejecutivo-Congreso; el resurgimiento del caudillismo; la acción corporativa directa de algunos movimientos sociales; la crisis del multipartidismo; un estado centralizador; la profunda desigualdad social; el deterioro de las condiciones de vida; el clientelismo; una cultura política tradicional; y la crisis progresiva del sistema democrático.

Con el gobierno de Abdalá Bucaram (1996-1997) todo pareció estallar, pues en apenas seis meses se resumió la podredumbre política y la conflictividad del país. Desde 1979, el de Bucaram fue el primer gobierno en ser derrocado por el hastío nacional. De inmediato su sucesor, el presidente interino Fabián Alarcón, lanzó su estrategia de legitimación política. El 6 de abril de 1997 convocó a una consulta popular que debía realizarse el 25 de mayo del mismo año. El pueblo debió pronunciarse sobre 14 temas fundamentales: ratificación del mandato surgido del derrocamiento de Bucaram, convocatoria a una Asamblea Nacional “con el exclusivo propósito de que reforme la Constitución Política de la República”; la integración de la asamblea bien por todos los miembros elegidos por voto popular o bien una parte por votación y otra parte de miembros por representantes de instituciones y organizaciones del Estado y la Sociedad Civil; régimen partidista; límites y control al gasto electoral; integración del Tribunal Supremo Electoral (TSE); designación de los titulares de los Organismos de Control; forma de elección de diputados, concejales y consejeros; modernización de la Función Judicial; revocatoria del mandato. El “Si” triunfó en todas las preguntas, así como la opción de que todos los miembros de la Asamblea sean electos por votación popular y la elección “unipersonal” de diputados (además, en la primera vuelta de las elecciones presidenciales), concejales y consejeros.

En virtud del mandato popular se inició el camino a la Asamblea. En el país comenzó el debate sobre su agenda. Varias de las reflexiones sobre la trascendencia y la oportunidad de la Asamblea para el futuro del Ecuador, escritas por intelectuales y notables de la época, están recogidas en el libro “Asamblea. Análisis y propuestas” (1998). Pero no solo allí. El “Programa de Apoyo al Sistema de Gobernabilidad Democrática”, que llevó adelante el Presidente Interino, el Ministerio de Gobierno y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), publicó dos tomos (545 páginas, en total) sobre “Reforma Política y Asamblea Nacional” (1997). ¡Qué no se trató por entonces!

También CORDES presentó sus “Temas para la reforma constitucional ecuatoriana”: elección presidencial en primera o segunda vuelta, elección de diputados, elecciones a mitad de período, mayorías y alianzas, rendición de cuentas, candidatos por listas o entre listas, régimen de partidos políticos, los independientes, representación nacional o

provincial, cuotas para indios y mujeres, indisciplina partidista. Finalmente, se recordará que el expresidente Osvaldo Hurtado Larrea presidió la Asamblea de 1998, de la que surgió la Constitución actualmente vigente, sobre la base de las reformas a la Constitución de 1979 aprobada por referendo nacional.

Frente a ese pasado, es indudable que la clase política, la derecha económica y la oligarquía tradicional, son las que han impedido el avance del país. Por ello la propuesta con Rafael Correa para un Nuevo Rumbo debiera ser comprendida en el marco del estrangulamiento ocasionado a la marcha modernizante del Ecuador.

Al panorama político debiera unirse la comprensión del panorama económico. Desde 1979 la sociedad ecuatoriana en sus bases, no en sus cúpulas dominantes, se ha visto afectada por la conducción económica bajo ese frustrante *modelo empresarial* de desarrollo, que superó al viejo *modelo estatal-desarrollista*. Pero en el país no hay todavía la costumbre académica y mucho menos política para visualizar los logros sociales, sobre los que solo una elite suele pronunciarse. Por ello se hace énfasis en la “estabilidad” de los índices macroeconómicos, aunque ello haya significado la acumulación de la inequidad, la precarización laboral, la destrucción de la seguridad social, la baratura de la mano de obra y, en la última década, la masiva emigración de ecuatorianos y ecuatorianas.

El proyecto de Alianza País ha ofrecido un cambio del rumbo económico. El mismo presidente electo, gracias a sus conocimientos de economía, ha sido el primero en encabezar la visualización de las consecuencias sociales perversas del modelo inspirado en el neoliberalismo globalizador. Y por ello ha enfatizado en el gasto social y en otras propuestas que implican una comprensión distinta de la economía, que tomó distancia completa frente a los economistas “ortodoxos, conservadores y prudentes” (OCP, como los bautizaron Alberto Acosta y Rafael Correa en algún momento), que habían sido la estrella favorita de la defensa de los “equilibrios” y del lenguaje periodístico que inundó el ambiente nacional en los últimos años.

Desde luego, en el futuro los desafíos son mayores que el simple triunfo electoral. Pero en ello también cabe otra comprensión: como puede demostrarse en la historia ecuatoriana, las transformaciones con sentido social no son obra simplemente del gobierno de turno. Otra vez valdría el ejemplo de la Revolución Liberal (1895): sin la movilización popular no habría sido posible la derrota del sistema conservador. Y se impone también una última comprensión: la historia latinoamericana ha demostrado que las transformaciones sociales requieren de la autoridad del Estado. Eso lo comprendió a su debido tiempo el Libertador Simón Bolívar. Solo que se topó con fuerzas más poderosas. En los últimos años de su vida, sus escritos están repletos de frustraciones frente a la América Latina dominada por los caudillos y las oligarquías internas.

Desde luego, el Ecuador no se halla en la época de la Independencia ni de la Revolución Liberal. Pero los ecuatorianos se pronunciaron mayoritariamente por un cambio de rumbos y no quieren verse frustrados una vez más. Solo que ese cambio no puede dejarse exclusivamente en manos del futuro gobierno, sino que requerirá el apoyo y respaldo de la movilización ciudadana y la organización social.

* Doctor en Historia. Profesor de la PUCE